



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I.¹, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

PROCESO	Verbal (Simulación)
DEMANDANTE	Luis Alejandro Correa y otro.
DEMANDADO	Juan Guillermo Álvarez Londoño y otro.
PROCEDENCIA	Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-007–2015-00890-02
RADICADO INTERNO	086-22
PROVIDENCIA	059-23
DECISIÓN	El monto que se señale por agencias puede controvertirse mediante la formulación de los recursos de reposición y apelación en contra del auto que apruebe la liquidación de costas. Las agencias en derecho se señalan conforme al Acuerdo que se encuentre vigente al momento del inicio de la demanda. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandada, frente al auto proferido el 22 de septiembre de 2022, mediante el cual el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín aprobó la liquidación de costas.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Martin Alberto Kilby Esquivel y Luis Alejandro Correa Restrepo presentaron demanda verbal en contra de los señores Juan Guillermo Álvarez Londoño y la sociedad Tomás Álvarez Botero y Cía. S. en C., pretendiendo de declaratorio de la simulación absoluta de la negociación consignada en las escrituras públicas número 1858 y 3667, del cuatro de agosto

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

de 2009 y 27 de diciembre de 2013, respectivamente, otorgadas ambas en la Notaría Séptima de Medellín.

Peticionaron que, como consecuencia de esta declaración, se ordenara reembolsar a los demandantes los intereses causados desde el 27 de febrero de 2007, en la modalidad de lucro cesante, los cuales estimaron en la suma de \$640.000.000.

2.- Trámite. Una vez finiquitadas cada una de las etapas respectivas, el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD MEDELLÍN, profirió sentencia el siete de febrero de 2017, en la que desestimó las pretensiones de la demanda; en consecuencia, condenó a la parte demandante al pago de las costas causadas en esa instancia, señalando como agencias en derecho \$10.000.000, las cuales deberían ser canceladas por ambos demandantes por partes iguales.

Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia, con la consecuente condena en costas a la parte recurrente, para lo cual fijó como agencias en derecho el monto de \$3.058.000.

3.- El auto apelado. En el mes de agosto de 2022, se devolvió el proceso al Juzgado de origen, el que, después de cobrar firmeza el auto de obediencia a los resuelto por el superior, mediante proveído del 22 de septiembre de 2022, procedió a aprobar la liquidación de costas realizada por el secretario; esto es, como agencias en derecho en primera instancia \$10.000.000, y, en segunda instancia \$3.058.000.

4.- La apelación. El vocero judicial de los demandados interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, manifestando que la liquidación de las agencias en derecho debe ser equitativa y razonable, conforme lo establece el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Dijo que conforme en mencionado acuerdo, la agencias en primera instancia podían ascender hasta el 20% de las pretensiones, que equivalían a \$1.003.288.065, y el Juzgado solo fijó \$10.000.000, esto es, tan solo el 0.99%. Que, igualmente en segunda instancia, las agencias en derecho podrían alcanzar al 3% de las pretensiones, pero solo se señaló el 0.3%.

Adujo que, las dos sumas anteriores no dan cuenta de la duración del proceso (7 años a la fecha) ni a la alta complejidad del asunto objeto del litigio. En su sentir, la citada liquidación de agencias en derecho no se encuentra conforme con el artículo 3º del Acuerdo 1887 de 2003.

Por lo anterior, deprecó la reposición del auto del 22 de septiembre de 2022, condenando al pago de agencias en derecho en suma equitativa y razonable, conforme a los criterios legales.

El Juzgado de primera instancia, en proveído del seis de octubre de 2022, no repuso la liquidación de costas, sin embargo, concedió el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria.

CONSIDERACIONES

1.- Costas procesales. Las costas procesales son los gastos útiles o necesarios en los que debe incurrir la parte que resulta vencedora en un proceso ya sea para iniciar e impulsar el mismo, o para resistir el que es formulado en su contra, según sea el caso.

El legislador estableció que la parte que resulte vencida en un proceso o determinada actuación, debe asumir los referidos gastos, hechos por su contraparte, con el fin de reintegrarle los valores que haya debido asumir.

Dentro de las costas, se incluye como rubro o concepto, el monto correspondiente a las agencias en derecho, antes consagradas en el artículo 393 numerales 2º y 3º del C.P.C, hoy en el precepto 366, numeral 4º del C.G.P., y han sido definidas por la jurisprudencia constitucional, en la sentencia C - 539 del 28 de julio de 1999, citada en la sentencia C - 89 de febrero 13 de 2002, así:

“... las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales —vale la pena precisarlo— se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial. Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito, y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó

personalmente). **Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado.**” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

El precepto 393-3 que viene de indicarse, vigente para el momento de la condena en costas en este asunto, establecía que para tal efecto, el juez debía atender las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 (modificado por el Acuerdo No. 2222 del 10 de diciembre de 2003 en cuanto a los procesos ordinarios, abreviados y verbales), señalando que en los eventos que éstas establezcan solamente un mínimo, o éste y un máximo se debía tener en cuenta, además, la naturaleza, la calidad, la duración de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales, sin que en ningún evento pudiera fijarse una suma superior al máximo. Además, en dichas pautas se disponía que *“Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones” (art. 3).*

Ahora, el Código General del Proceso que ya había entrado a regir para la fecha en que se realizó la liquidación de las costas, contempló en su artículo 366, numeral 5°, la posibilidad de controvertir la *“liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho”*, mediante los recursos de reposición y apelación que se formularan oportunamente en contra del auto que aprobara la liquidación de costas.

2.- Caso concreto. En el *sub judice*, tenemos que la parte demandada, que fue la beneficiada con la condena en costas dentro del proceso, tanto en primera como en segunda instancia, oportunamente atacó el auto que aprobó la liquidación de las costas efectuada por el *a quo*, pues considera muy bajo el monto fijado por agencias en derecho en ambas instancias.

En esa medida, se limitará esta Corporación al estudio de los argumentos cimientamiento de la apelación impetrada en contra del monto de las agencias fijadas en las dos instancias, que ascendieron a la suma de \$10.000.000 en primera y \$3.058.0000, en segunda.

Al respecto, el numeral 1.1 del artículo 6° del Acuerdo 1887 de 2003, modificado por el Acuerdo 2222 de 2003, aplicable a este caso, pues era el vigente para el momento de la imposición de la condena en costas, establece que, para la

primera instancia de los procesos ORDINARIOS, puede señalarse **hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia; y en segunda instancia, hasta el 5% del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia.**

En presente asunto, la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, lo cual fue confirmado en segunda, por lo que será sobre el valor de ésta, que deberá aplicarse un porcentaje atendiendo a *“la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables”*, conforme lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 1887 antes citado, como criterio, y teniendo como limitante máxima el 20% para primera instancia y el 5% para segunda instancia, que contempla la preceptiva arriba señalada.

Es así que, tomándose como referencia el total de las pretensiones, que, de acuerdo a la liquidación realizada por el recurrente ascendían a \$1.003.288.065, tenemos que los montos fijados como agencias, esto es, la suma de \$10.000.000 y \$3.058.000, son el resultado de aplicar sobre las pretensiones un porcentaje entre el 0.3% y 0,99%, respectivamente. Por lo tanto, puede evidenciarse que los porcentajes aplicados para la liquidación de las agencias en derecho estuvieron dentro de los rangos que regula la disposición antes citada, que establece unos máximos sobre el valor de las pretensiones, y, adicionalmente, siguió la fijación inversamente proporcional aludida.

Ahora, hay que resaltar que, en parte alguna se establece como criterio para la fijación del monto de las agencias, el tiempo que se demore el trámite del respectivo proceso, por tanto, tal circunstancia no puede tener implicación en la decisión del Juzgado de primer grado, al momento de establecer el monto de las agencias en derecho.

En efecto, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, por tanto, su cuantía debe atender a los principios de Justicia y equidad, más no su enriquecimiento.

En esa medida, atendiendo a la naturaleza del proceso, pues se trata de un

proceso verbal cuyo debate se limitó a la verificación de los supuestos de hecho alegados por la parte demandante, específicamente de la simulación, y, que a la parte demandada le bastó proponer la excepción de inexistencia de acuerdo simulatorio para obtener el decaimiento de la pretensión de la parte actora, esta Sala considera viable y procedente las cuantías de las agencias en derecho fijadas, las cuales, se repite, están dentro de los rangos establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

CONCLUSIÓN

Corolario de lo anterior, como las agencias en derecho fijadas se encuentran dentro de los parámetros legales, se confirmará la decisión apelada; sin lugar a condena en costas, dada su no causación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, el 22 de septiembre de 2022, dentro del proceso VERBAL instaurado por Martin Alberto Kilby Esquivel y Luis Alejandro Correa Restrepo en contra de Juan Guillermo Álvarez Londoño y la sociedad Tomás Álvarez Botero y Cía. S. en C.

Sin lugar a condena en costas, dada su no causación.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022